

De ignorancia y lealtad. Portugueses en Madrid, 1640-1670 ⁽¹⁾

Rafael Valladares ^(*)

En 1648, el portugués Francisco Manuel de Melo anotaba: «Es más de los más grandes el cargo de socorrer a los perseguidos. Dudo que haya virtud tan competente a la grandeza como aquella de amparar y socorrer descaminados y menesterosos. Tan próximo está a ser Padre de todos el que a todos como Padre recibe», concluía ⁽²⁾.

El testimonio de Melo resulta especialmente valioso si atendemos a su peculiar biografía. Para lo que aquí nos concierne, baste recordar que cuando escribió estas palabras se hallaba encarcelado en la Torre de Belén de Lisboa. La causa de su prisión aún se ignora, pero se presume que tuvo relación con la desconfianza que despertó su persona en el gobierno del nuevo régimen portugués nacido del golpe de estado del 1 de diciembre de 1640, cuando los opositores a la política reformista de Felipe IV optaron por aclamar al duque de Bragança como D. João IV de Portugal. La historia de Melo (pariente del nuevo monarca), no difería de la de muchos otros que, como él, dudaron hacia qué parte del conflicto —Madrid o Lisboa— debían rendir su lealtad. Aunque en 1640 Melo decidió seguir bajo Felipe IV, en 1642 huyó a Lisboa y, tras el encarcelamiento aludido, fue rehabi-

(*) CSIC.

(1) Este trabajo constituye un avance del proyecto de investigación «Los exiliados portugueses en Madrid, 1640-1700», financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado bajo la dirección de don Alfredo Alvar Ezquerro en el Centro de Estudios Históricos del CSIC. Por tanto, las conclusiones aquí expuestas deben considerarse provisionales.

(2) Francisco Manuel de Melo, *El Fénix de África. Vida de S. Agustín nuestro padre* (Alcalá, 1688), p. 216 [Lisboa, 1648].

litado en 1656. Tras desempeñar cometidos diplomáticos en Roma y Londres, murió en Lisboa en 1666 en plena gloria social y literaria.

Su trayectoria se sumó a la de aquellos portugueses de mediados del siglo XVII de los que apenas se ha tratado hasta hoy ⁽³⁾. Sin embargo, este *capítulo portugués* del barroco hispánico no fue ninguna rareza, sino un eslabón más en la larga cadena de exilios protagonizados por la nobleza lusa en Castilla desde la Baja Edad Media. En realidad, estas emigraciones constituían un mecanismo de defensa usado por la aristocracia para sortear sus problemas con unos príncipes cada vez más autoritarios. Bien por luchas entre la corona y los títulos o entre los propios linajes, la huida a la corte de otro rey permitía eludir o suavizar una caída en desgracia que podía ir desde el simple destierro hasta la confiscación de bienes y la pena capital.

Los cambios de dinastía fueron coyunturas singularmente propicias para este tipo de crisis. En Portugal, el pase de la casa de Borgoña a la de Avis a fines del siglo XIV causó un primer exilio de portugueses a Castilla, que se vio acompañado por otro cien años después cuando la guerra por el trono castellano y la política autoritaria de D. João II provocaron la huida de los hijos del duque de Bragança —entre otros— a la corte de los Reyes Católicos ⁽⁴⁾. La instauración de los Austrias en Portugal en 1580 no generó un problema similar gracias a las negociaciones que Felipe II dispuso con la nobleza lusa antes de ser aclamado rey, pero es significativo que previamente a la agregación ya preocupase a los títulos del reino el hecho de tener que compartir el mismo monarca con los castellanos, lo que implicaría decir adiós a la posibilidad de refugiarse en una corte distinta, pero tan vecina a la suya. Visto así, se comprende que la escisión de Portugal en 1640 supuso la reaparición de dos cortes rivales entre las que poder elegir. Oferta y demanda debían ajustarse al ritmo del turbulento mercado político de mediados del siglo XVII. Nuestro propósito consiste en averiguar cuál fue el sentido de la presencia portuguesa en el Madrid de Felipe IV, y particularmente de los nobles, quienes, por su condición de grupo dirigente, pueden arrojar no escasa luz sobre el mundo de los conflictos políticos que aquejaron a la Monarquía Hispánica en su declive, y al que sin duda contribuyeron tanto o más que los fracasos económicos y militares.

(3) Véase nuestro libro *Felipe IV y la Restauración de Portugal* (Málaga, 1994), pp. 165-199, al que siguió el artículo de F. Bouza Álvarez, «Entre dos reinos, una patria rebelde. Fidalgos portugueses en la monarquía hispánica después de 1640», *Estudis*, 23 (1994), pp. 83-103.

(4) E. Mitre Fernández, «La emigración de nobles portugueses a Castilla a fines del siglo XIV», *Hispania*, XXVI (1966), pp. 513-525; A. de la Torre y del Cerro, «Los hijos del Duque de Braganza en Castilla (1483-1496)», *Hidalguía*, X (1962), pp. 161-168; y M.R.C.M. de Fernádes, «Refugiados castelhanos e portugueses em Portugal e Castela no último quartel do século XV», *Encuentros/Encontros de Ajuda* (Badajoz, 1987), pp. 400-411.

Existía, por tanto, una tradición de exilios y una cultura política preparada para afrontar el problema de los desterrados. De hecho, a veces se olvida que el imperio español no fue sólo un agente causante de exilios, como el de los judíos, moriscos, conversos o disidentes, sino también lugar de refugio para sus equivalentes de otros países. Los católicos de Inglaterra e Irlanda se asentaron en Flandes y España en número no desdeñable y, sobre todo, con una continuidad que no permite ver el hecho con indiferencia. Sin embargo, lo peculiar del fenómeno que hoy nos ocupa radicó en su carácter excepcional al tratarse de un exilio político, no religioso, nacido de una rebelión endógena de la Monarquía y, para mayor interés, concentrado en Madrid.

En 1640, la corte de los Austrias tuvo oportunidad de mostrar su vocación de anfitriona haciendo hueco a dos importantes grupos venidos de fuera: los catalanes y los portugueses huidos de las respectivas alteraciones que habían sacudido al Principado y a Portugal. En junio, la rebelión de Cataluña obligó a salir de allí a casi toda la nobleza y la jerarquía eclesiástica; en diciembre, el golpe de Lisboa hizo que los numerosos portugueses que residían habitualmente en Madrid se convirtieran automáticamente en exiliados, a los que se añadieron los pocos que desde entonces llegaron de Portugal ⁽⁵⁾.

Aunque unidos por su origen, los exilios catalán y portugués resultaron diferentes en muchos aspectos. Mientras los catalanes llegaron a la corte en 1640, los portugueses ya estaban en ella desde antes. Además de llegar más tarde, los catalanes también fueron los primeros en regresar a sus casas, una vez que la toma de Barcelona en 1652 permitió recuperar casi todo el Principado. Los portugueses, en cambio, permanecieron mucho más tiempo y su número —que llegó a 250 en algunos momentos— superó siempre al de los catalanes, unos 75. Naturalmente, estas cifras se refieren únicamente a quienes la corona reconoció como vasallos merecedores de asistencia. Este requisito era fundamental para poder beneficiarse del pago de las pensiones que, con el nombre de *socorros*, empezaron a cobrar lusos y catalanes desde fines de 1640. Pero, ¿cuál fue el objetivo de la corona a la hora de asistir a tantos y tan caros huéspedes?

De entrada, existía un principio incuestionable de orden político y moral: Felipe IV estaba obligado a amparar a quienes habían abandonado todo por lealtad a su persona. Como padre de sus vasallos, debía demostrar que lo era —y más, si cabe— en tiempos de dificultad. En segundo lugar, se trataba de hacer creíble a los rebeldes que la causa bragancista estaba injustificada por constituir un gravísimo delito de traición a su rey legítimo. Así, mientras la alta nobleza y los obispos de Cataluña y Portugal permanecieran en Madrid, los insurrectos no podrían demostrar que sus respectivos levantamientos habían sido unánimes, sino todo lo

(5) Para el caso catalán contamos con un importante estudio: J. Vidal Pla, *Guerra dels Segadors i crisi social. Els exiliats filipistes (1640-1652)* (Barcelona, 1984).

contrario. En este sentido, la presencia de los exiliados en Madrid legitimaba a Felipe IV tanto como deslegitimaba a quienes se le oponían desde Barcelona y Lisboa ⁽⁶⁾. A su vez, la prioridad otorgada a la reconquista de Cataluña frente a la de Portugal aumentó el valor simbólico de la presencia lusa en Madrid, con la que se pretendía atraer a quienes permanecían junto al rey Bragança. El objetivo a corto plazo era dejar a D. João IV rodeado únicamente por la soledad de su felonía, de manera que la pérdida de apoyos facilitara su fin incluso sin necesidad de orquestar una guerra.

Este combate por la legitimidad tenía un precio muy elevado. Desde 1640 el gobierno de Felipe IV estableció las pensiones que debían cobrar los exiliados de acuerdo a su categoría social. A la cabeza figuraban los obispos, arzobispos y títulos, cuyas mesadas oscilaban entre los 1.500 y 4.000 reales; seguían los letrados y oficiales, que cobraban menos de 1.000 –salvo excepciones; finalmente, venía una pléyade de soldados, viudas y huérfanos que esperaban recibir (y recibían) alguna asistencia de su rey: las listas de beneficiarios de pensiones así lo demuestran, al igual que el gasto que representaron. Entre 1641 y 1646 su número llegó a 386 (252 lusos y 134 catalanes); en 1647, a 172 (97 y 75, respectivamente); en 1650, a 53 (34 y 19); y en 1660, cuando la mayoría de los catalanes habían vuelto al Principado, a 30. El coste de su mantenimiento entre 1641 y 1669 –con datos provisionales– sumó 1.759.000 ducados, distribuidos de forma irregular aunque descendente: de los 226.000 ducados del primer año citado, se pasó a unos 90.000 entre 1642 y 1660, excepto entre 1647-1649 en que la crisis de la hacienda regia obligó a bajar hasta apenas 42.000. Entre 1660 y 1668 el gasto se estabilizó en los 30.000 ducados, para pasar a sólo 9.000 en 1669 ⁽⁷⁾. En general, los portugueses acapararon más del 50% del gasto –e incluso el 83% de él entre 1642 y 1646–, sin olvidar que en la década de 1660 fueron ellos prácticamente los únicos beneficiarios. Ello fue consecuencia no sólo de su mayor número frente a los catalanes, sino también del abultado número de nobles que figuraban entre ellos –unos 31 condes y condesas hasta 1646, además de 3 marqueses, 1 arzobispo y 3 obispos.

Estas cifras no representan el gasto completo, sobre todo porque la caída de las partidas dedicadas a pagar los socorros resulta engañosa en la medida en que no refleja una de las causas que generó aquel descenso: la concesión a los exiliados de un oficio por el que percibían los gajes de rigor. La ventaja de este sistema era sólo económica, pues aunque permitía limitar el gasto en pensiones y evitar la ociosidad de los exiliados, tan criticada, suponía que los irritados castellanos debían competir con los portugueses. No se olvide que la tradicional inquina

entre unos y otros se vio agravada por el golpe de 1640, que brindó a los castellanos una coartada perfecta para atacar a los lusos. La tensión aumentó también por el sistema elegido por la corona para financiar las pensiones de los portugueses: Hasta 1649, el dinero se extrajo de las medias anatas que pesaban sobre los juros con destino al ejército, lo que habla de la provisionalidad que se pensó tendrían los gastos generados por el exilio. Al ver que el problema se dilataba, se optó por negociar préstamos anuales con los banqueros para afrontar el pago de los socorros. Estos asientos se acordaron mediante la concesión, por parte de la corona, de una parte de la recaudación de las alcabalas en las dos Castillas y Andalucía, así como de la media anata de los juros. Para más inri, Felipe IV ordenó en cada suspensión de pagos que los banqueros encargados de esta negociación no resultaran afectados por aquéllas. En otras palabras, eran los pecheros castellanos y los poseedores de títulos de la deuda real quienes mantenían a los exiliados. Dinero castellano para portugueses que, obviamente, eran frecuentemente acusados de traidores, reales o en potencia. Las formas, al menos, se guardaron en un aspecto: los asentistas elegidos para esta negociación fueron dos castellanos, Manuel López de Salceda y su yerno Baltasar de Medinilla.

Pese a la malquerencia que los portugueses despertaban en Madrid, la corona no dudó a la hora de rentabilizar su inversión en ellos. Por ejemplo, en 1641 se decidió la creación de una serie de juntas de gobierno integradas por lusos que tendrían por finalidad aparentar la alta estima en que Felipe IV tenía a sus leales. Salvo una o dos de ellas, formadas por estrechos colaboradores de Olivares, el resto conoció una actividad mediocre y, por supuesto, controlada por el consejo de estado. Mayor fortuna tuvieron los escasos portugueses designados para ocupar puestos de relevancia fuera de la corte o dentro de ella. En el primer caso estuvieron D. Francisco de Melo, marqués de Torrelaguna y conde de Asumar, nombrado gobernador de Flandes entre 1641 y 1644, y su sucesor en el cargo, D. Manuel de Moura Corte Real, II marqués de Castel Rodrigo, en Bruselas entre 1644 y 1647, así como los generales D. Felipe de Silva o D. Antonio de Brito. En el segundo, fray João de Santo Tomás, confesor de Felipe IV entre 1643 y 1644. El brillo del Rey Católico como monarca de Portugal se pretendía aumentase de acuerdo al número y calidad de los *fidalgos* situados estratégicamente a su alrededor.

El equilibrio de intereses dentro del triángulo formado por la corona, los castellanos y los portugueses nunca llegó a existir, e incluso conoció crisis extremadamente graves. A medida que la reconquista de Portugal se posponía, resultó más fácil para los enemigos de los portugueses hacer ver que el objetivo de éstos consistía en pasar por leales sólo por interés. En este sentido, la concesión de títulos a los caballeros lusos se consideró una provocación difícilmente aceptable para los demás súbditos de la Monarquía. En 1641, Felipe IV concedió el título de conde a varios caballeros venidos de Portugal a Madrid. Entre los agraciados, la aspiración lógica consistió en aprovechar las circunstancias para subir al gra-

(6) «El modo de usurpación fue con violencia de armas, sublevando al pueblo. Así lo comprueban los señores de título y caballeros ilustres que se han pasado de aquel reino al de Castilla». Biblioteca Nacional de París, Fondo Español, Mss. 144, fols. 194-194v., don Juan Chumacero al papa (sin fecha).

(7) Las fuentes son: Archivo General de Simancas (AGS), Contaduría Mayor de Cuentas, Tercera Epoca, legajos 86, 619, 813, 2845 y 3261.

do de marqués y, quién sabe, incluso al de duque, de manera que en pocos años algunos portugueses vieron encumbrar su linaje hasta límites que, en condiciones normales, les habría costado varias generaciones. Un caso notable fue el de D. João Soares de Alarcão. En 1640, siendo *Alcaide Mor* (gobernador militar) de Torresvedras, Felipe IV lo nombró gobernador de Ceuta. A punto de embarcar hacia su nuevo destino se produjo el golpe de Lisboa, pero Alarcão no estaba dispuesto a que un duque aventurero como el de Bragança arruinara su prometedor cargo en Ceuta. En 1641 logró pasar a Castilla, donde Felipe IV le hizo conde de Torresvedras, consejero de guerra y además lo confirmó como gobernador de la plaza ceutí. Pero Alarcão aspiraba a más, por lo que varias veces solicitó el título de marqués, sin éxito⁽⁸⁾. La fortuna le sonrió en 1652, cuando Felipe IV le concedió el marquesado de Trocifal para compensarle por la muerte de su primogénito, ocurrida durante el asalto a Barcelona⁽⁹⁾. En apenas doce años, un simple gobernador militar de provincias había pasado a ser conde y luego marqués, miembro del gobierno para asuntos de guerra y beneficiario de elevadas rentas otorgadas por Su Majestad.

Tal vez la rebelión de Portugal no fuera un mal negocio para los lusos que habían optado por Madrid, al menos para los que, como Alarcão, habían dejado muy poco en su reino de origen. Muy diferente fue el caso de los nobles que poseían allí tierras y señoríos. Por ejemplo, el marqués de Castel Rodrigo. En 1645, el rey de Portugal decidió poner fin al plazo de gracia que había dado a la nobleza lusa para volver al reino⁽¹⁰⁾. Cuando poco después comenzaron a confiscarse las propiedades de los llamados eufemísticamente *ausentes*, Castel Rodrigo o el conde de Basto resultaron de los más afectados, lo que alegró a sus viejos enemigos en Portugal. A su vez, también entre los castellanos emparentados con portugueses se desataron las ambiciones al hilo de la rebelión. En 1642, el conde de Medellín solicitó de Felipe IV que le declarase heredero del duque de Bragança para que, una vez derrocado éste —como se esperaba—, sus bienes pasaran a su casa sin disputa alguna⁽¹¹⁾. Tal era uno de los objetivos más acariciados por los portugueses de Madrid: ser recompensados, al acabar la guerra, con las propiedades de los afectos a D. João IV.

Desde el inicio del conflicto, los portugueses usaron tres tácticas de supervivencia: el regreso a Portugal (antes de que fuera demasiado tarde), la división familiar entre Madrid y Lisboa y la integración entre los castellanos. La primera opción debía contar antes con el beneplácito de Felipe IV, cuyo gobierno discre-

paba sobre la concesión de licencias para tornar a Portugal. Si se otorgaban a todos, éstos pensarían que se les facilitaba porque se sospechaba de ellos como «espías», con lo que verían mejor partirse que quedarse; si no se les concedía, el descontento aumentaría. Además, quedaba por ver cuál sería el papel de los portugueses una vez en su tierra. Para el duque de Villahermosa, era obvio que los regresados no tendrían más remedio que servir a D. João IV «para purgarse de cualquier leve sospecha que haya contra ellos», lo que dificultaría la recuperación de Portugal. El punto de vista del marqués de Lorian era más pragmático. Resultaba innegable que los portugueses formaban tres grupos: los leales, los espías y un «tercer género» que dudaba entre unos y otros. Su plan consistía en que todos pudieran volver a Portugal si así lo deseaban con vistas a tres resultados: eliminar a los espías (que serían canjeados por prisioneros castellanos), ahorrar dinero en pensiones y, sobre todo, con la ayuda de los leales, «meter inquietudes que pudiesen ser causa de alguna resolución grande en la nobleza» o, cuando menos, de «acrecentar la desconfianza del rebelde y las turbaciones del reino»⁽¹²⁾.

Por muy lógicas que parecieran tales propuestas, lo cierto es que Felipe IV no se mostró excesivamente favorable a conceder licencias. El argumento de Villahermosa de que los retornados se verían presionados para servir a D. João, era más realista que el de fundar sobre su lealtad a distancia la esperanza de un contragolpe austracista. De hecho, el que había sido abortado en agosto de 1641 había costado la vida al marqués de Vila Real, a su hijo el duque de Caminha y al conde de Armar, advertencia que la nobleza lusa de Lisboa o Madrid no dejó de tener presente⁽¹³⁾. Dado, pues, que el peligro existía tanto para Felipe IV como para los exiliados, éstos mostraron su preferencia por una estrategia menos arriesgada que la vuelta a Portugal: la división familiar. Así, no resultó extraño que un mismo linaje tuviera representantes en las dos cortes en conflicto. Algo que no pasó inadvertido para los castellanos. «De algunos dicen —informaba el presidente del consejo de Castilla— que les acuden en Portugal con su hacienda como si allí residieran. Otros comen allá por los hijos o parientes que quedaron acá, con que disfrutan a ambos reinos, y en la recuperación [de aquél] tendrán indulto unos por otros»⁽¹⁴⁾. Digno de notar fue el caso de la familia Mascarenhas, emparentada con los Soares de Alarcão. Mientras su titular, D. Jorge, marqués de Montalvao y conde de Castilnovo, se había unido a la rebelión desde su puesto de virrey en Brasil, su mujer y varios de sus hijos pasaron a Castilla en 1641. A su regreso a Lisboa fue encarcelado bajo sospechas de austracismo, al igual que uno de sus hijos, jesuita, que había optado por quedarse en Portugal. No menos destacable fue la división protagonizada por D. Jerónimo de Ataíde. Su padre, el V conde de Castanheira, aclamó al duque de Bragança, mientras él se exilió a Madrid donde Felipe IV le hizo marqués de Colares.

(8) Por lo menos en 1643, 1645 y 1647. Biblioteca del Palacio Real, Madrid, Ms. II-1431, fols. 581-585. Informe a Felipe IV sobre el conde de Torresvedras (sin fecha, pero de 1647).

(9) Véase Alonso de Alarcón, *Corona sepulcral. Elogio en la muerte de Don Martín Suárez de Alarcón, hijo primogénito del Excelentísimo Señor Marqués de Trocifal* (Madrid, 1652).

(10) Biblioteca de la Universidad de Coimbra, Ms. 38, fols. 341-344v. Decreto de D. João IV 17/VIII/1645.

(11) Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4966, O. Pucci al Gran Duque de Toscana, Madrid, 15/I/1642.

(12) AGS, Estado, leg. 3850, Consejo de Estado, 8/IX/1645.

(13) Al respecto, R. Valladares, «Sobre reyes de invierno. El Diciembre Portugués y los Cuarenta Fidalgos (o algunos menos, con otros más)», *Pedralbes*, 15 (1995), pp. 103-136, en especial, 121-123.

(14) Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 13.164, fol. 42. Chumacero a Felipe IV, 30/III/1645.

Para quienes había poco que recuperar en Portugal y algo o mucho que ganar en Castilla, la vía más aconsejable fue la de naturalizarse castellanos y así romper las barreras legales que impedían disfrutar de las mercedes más seguras. Cuando, sin embargo, se votaba en las cortes la concesión de este privilegio, la protesta castellana hacía acto de presencia ⁽¹⁵⁾. No podía ser de otra manera. En 1647, una investigación llevada a cabo por el consejo de Castilla descubrió que algunos de los exiliados mejor pagados por Felipe IV eran servidores del rey de Portugal, y que incluso enviaban parte de sus pensiones a Lisboa mediante letras de cambio. Cuando se intentó expulsarlos por la frontera de Badajoz, las autoridades lusas los rechazaron, por lo que Madrid tuvo que limitarse a desterrarlos a las afueras de la corte aunque sin retirarles los socorros. Tales eran los riesgos que la corona debía asumir si pretendía mantener su política en favor de los portugueses.

La crisis de 1647 supuso un cambio sustancial en las relaciones entre lusos y castellanos. Aquel «escándalo de la república», como se le denominó, sirvió para fortalecer la postura de los anti-portugueses, y sería preciso saber hasta qué punto esta animadversión castellana influyó en el deseo de los exiliados de volver a Portugal ante el panorama tan poco alentador que les aguardaba en Castilla en caso de que su reino no fuese recuperado. No era agradable vivir entre quienes de continuo exigían de los portugueses un certificado de buena conducta que algunos se avinieron a cumplimentar. Fue el caso del marqués de Torrelaguna, que desde 1640 decidió usar como divisa la flor de la Thora, símbolo del veneno de la rebelión, contrapuesta a la de la Anthora, que representaba el antídoto de la lealtad con la que todo buen portugués debía identificarse ⁽¹⁶⁾. Pero la desconfianza hacia los lusos en Castilla –y no digamos en América–, fue en aumento hasta el final de la guerra. En 1646, el presidente del consejo de Castilla pidió a Felipe IV que le exonerase de tener que tratar ciertos asuntos en presencia de portugueses, pues, como alegaba, «no tengo de los susodichos la satisfacción que pide el estado de los tiempos» –alusión inequívoca a su desconfianza hacia los lusos ⁽¹⁷⁾. En 1654, el consejo de estado propuso al rey una terna de candidatos para ocupar el gobierno de Ostende en la que se afirmaba que D. Francisco de Deza «parece el más a propósito si no le embarazare el ser portugués». Felipe IV, tras acusar el mensaje, nombró al castellano Bernabé de Vargas ⁽¹⁸⁾. Y en 1652, un portugués afincado en Cartagena de Indias escribió a Madrid lamentándose de que él y sus compatriotas de la América española eran tratados «peor que si fuéramos turcos o moros» ⁽¹⁹⁾.

Tal vez a causa de tanta hostilidad, los portugueses se vieron impelidos a com-

(15) Como ejemplo, Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid, Cortes de Castilla, leg. 55, actas del 29/V/1646 y 28/II/1647.

(16) Véase el grabado incluido en Jacinto de Herrera Sotomayor, la *Comedia de la Reina de las Flores* (Bruselas, 1643).

(17) BNM, 13.165, fol. 163, Chumacero a Felipe IV, 18/II/1646.

(18) AGS, Estado, leg. 2083, consejo de estado, 5/IV/1654.

(19) Archivo Histórico Nacional, Madrid, Documentos de Indias, 375, D. Pedro Ferrera de Barros al marqués del Basto, Cartagena de Indias, 20/I/1652.

plementar su estrategia de supervivencia mediante el desarrollo de una cultura de exilio que les dotara de suficientes armas para enfrentarse a la penosa cotidianidad de sus vidas. Este campo ha sido prácticamente ignorado por la historiografía española. Aunque sobre los problemas vivenciales de los exiliados religiosos –como los conversos– se ha avanzado mucho, el tema del exilio político dentro de la Monarquía Hispánica permanece inédito. Ello invita a moverse en este terreno con suma precaución.

Los interrogantes a este respecto son numerosos. ¿Se sentían un «grupo» los portugueses de Madrid? Si lo eran, ¿actuaron como tal? ¿Bajo qué criterios lograron esa unidad? ¿A quiénes incluyeron y a quiénes no para alcanzarla? En el supuesto de que la lograran, ¿hubo divisiones dentro del grupo? ¿Lograron neutralizarlas? Vayamos por partes.

A priori, resulta arriesgado afirmar que los portugueses de la corte de Felipe IV formaron un grupo, si por tal se entiende un conjunto de individuos unidos por intereses comunes. Además, aun en el caso de que hubiera existido este grupo, ello no significaría que dentro de él no hubiera habido tensiones capaces de acabar provocando su parálisis e incluso su disolución. De hecho, sabemos que entre los portugueses de Madrid los rasgos que les podían definir como grupo y, además, como exiliados, fueron muy débiles, hasta el punto de que las fuerzas de desunión entre ellos superaron a las de unión. Entre éstas, por ejemplo, figuraron el carácter noble de un elevado número de lusos, su orgullo de cristianos viejos y su supuesta lealtad a Felipe IV. Pero la aceptación de estos rasgos implicaba la exclusión de aquellos otros portugueses que, como los banqueros que asistían al Rey Católico en Madrid, fueron despreciados públicamente por sus compatriotas a causa de su fama de judaizantes, así como el resquemor de quienes, aun siendo portugueses, no podían servir al rey tan de cerca como los privilegiados ⁽²⁰⁾. Si, además, tenemos en cuenta que estos conflictos ya se daban entre la *fidalgúta* portuguesa antes de 1640, entonces, ¿dónde estaba la novedad del fenómeno?

En realidad, es difícil creer que hubiera algún rasgo unificador al margen del teórico servicio al rey, y éste, dada la competencia que desataba entre los interesados, ayudó a agravar las tensiones antes que a reducirlas. En un mundo donde la identidad estamental y las alianzas entre linajes pesaban más que el origen nacional, raramente podía suceder que un conjunto tan heterogéneo de portugueses como los que hubo en Madrid llegara a constituirse en grupo. De hecho, en la Hermandad de San Antonio de los Portugueses, creada en la corte para asistir a los lusos residentes en ella, sabemos que figuraban como miembros bien avenidos quienes en realidad combatían virulentamente por un espacio de poder alre-

(20) Por ejemplo, en 1659 fue detenido por la inquisición el portugués y cronista real Rodrigo Mendes Silva, acusado de judaizante. Entre quienes testimoniaron en su contra figuró el también portugués, y eclesiástico, Francisco Pais Ferreira. I.S. Revah, «Le procès inquisitorial contre Rodrigo Méndez Silva, historiographe du roi Philippe IV», *Bulletin Hispanique*, 67 (1965), pp. 225-252, en especial pp. 233-234.

dedor de Felipe IV. Y la rivalidad entre los aristócratas lusos fue, después de 1640, tan intensa o más que antes, como atestiguan las relaciones, por ejemplo, entre el marqués de Castel Rodrigo y el de Torrelaguna, o la reacción de casi todos los títulos en 1660 cuando el único duque que quedaba en Portugal —el de Aveiro—, decidió pasarse a Castilla a causa de sus diferencias con los Bragança. Por tanto, lo lógico es creer que a los portugueses de Madrid no les interesó presentarse como un colectivo reglado, sino más bien al contrario.

Fue, sin embargo, desde el exterior de estos círculos de portugueses y en confrontación con ellos donde surgieron las imágenes más tendentes a convertir a los lusos en un grupo fácilmente identificable. A los castellanos, en concreto, les interesaba que fuera así, desde el momento en que al englobar a los portugueses bajo una misma etiqueta la lucha para excluirles habría cosechado un primer triunfo: ser portugués equivaldría a ser traidor, real o potencial. Con todo, hubo que rendirse a la evidencia de que los portugueses se dividían en varias categorías. En las reiteradas clasificaciones que a este respecto realizó el consejo de estado, solían establecerse entre tres y cinco categorías, pero sobre todo se distinguía entre quienes estaban en la corte antes de 1640 y los llegados después, y entre quienes podía presumirse de lealtad o no ⁽²¹⁾. El criterio seguido, pues, se relacionaba con el grado de confianza que unos y otros despertaban en Madrid, y ésta no parece que dependiera de las actitudes previas a 1640 sino de la disposición mostrada después del golpe. En otras palabras, hubo figuras que antes de la rebelión habían sido opositoras a la política de Madrid (o sea, de Olivares), pero que luego destacaron como fieles servidores de Felipe IV.

La complejidad, pues, de la presencia portuguesa en la corte española no hace sino aumentar, según se vea el fenómeno por sus protagonistas o por sus espectadores. Los portugueses, por más renuentes que fueran a presentarse como grupo, no podían soslayar el único hecho que les unía a todos: la imposibilidad de regresar a su país salvo que optaran por mudar de lealtad. Es a partir de aquí donde cabe plantearse si existió entre ellos una mentalidad de exilio, es decir, la conciencia de vivir una situación condicionada mayoritariamente por su alejamiento forzado de Portugal.

De entrada, los términos que usaron los coetáneos para referirse a los portugueses son reveladores: mientras los castellanos les llamaban generalmente «los portugueses», rehuyendo cualquier concesión a sus circunstancias, los embajadores extranjeros en Madrid solían citarles como «los exiliados portugueses». La ausencia del término «exiliado» entre los castellanos pudo deberse a lo poco habitual que era este vocablo entonces, aunque es significativo que tampoco empleasen la expresión mucho más común —y recogida por el diccionario de Covarrubias— de *desterrado*, derivada de *desterrar* («echar a uno de su tierra») o *desterrarse* («dejar de su voluntad su tierra para no volver más a ella») ⁽²²⁾. Podría

creerse, en definitiva, que los castellanos prefirieron identificar a los portugueses por su origen antes que por las condiciones que les afectaron desde 1640, de las que, a su juicio, no pocos se estaban aprovechando de un modo abusivo.

En cambio, hay testimonios de cómo algunos portugueses se vieron a sí mismos como desterrados voluntarios llenos de virtudes morales. Por ahora, su escaso número no permite afirmar que quienes se definieron así aspirasen a construir un modelo ideal de grupo, sino que más bien se limitaron a aprovechar la imagen idílica del exilio creada por el estoicismo antiguo (reforzada luego por el cristianismo) para exaltar el supuesto sacrificio de quienes habrían dejado todo en Portugal para servir a Felipe IV. Según esta visión, el exilio no era un castigo, sino una prueba que permitía al hombre descubrir los valores universales en cualquier parte del mundo, y convertía al exiliado en un hombre virtuoso que enseñaba a los demás la constancia en la espera y la entereza ante el sufrimiento. En otras palabras, ser exiliado no representaba un desdoro, sino todo lo contrario, un modelo de conducta enaltecida que despertaba la admiración de los demás. Por esta razón se entiende que mientras algunos portugueses desearan presentarse en Madrid como «desterrados», sus enemigos castellanos les tratasen sólo como «portugueses».

Para que esta pretensión de entrar en el club de los exiliados cobrara fuerza, era necesario dotarla de unos soportes teóricos convincentes. En la reflexión llevada a cabo por estos portugueses para explicarse a sí mismos y a los demás las decisiones tomadas, destacaron tres conceptos: patria, lealtad y libertad de elección. Los tres se relacionaban en sentido jerárquico, ya que se suponía que la patria —en este caso, Portugal—, y el apego a ella debían supeditarse a la lealtad al rey —Felipe de Austria, tercero de este nombre en Portugal. Este principio básico —anteponer el príncipe a la patria— era consustancial a las monarquías plurinacionales de entonces y lo que permitía su existencia. Cuando el pintor florentino Carducho afirmaba en 1633 que se juzgaba «por natural de Madrid, si allí es la patria donde mejor sucede lo necesario a uno», no hacía sino seguir una idea comúnmente aceptada y que daría mucho juego a los portugueses desde 1640 ⁽²³⁾. Uno de éstos, el marqués de Montebelo, al escribir la biografía de un antepasado, fue más allá al desvincular la permanencia en la patria de la felicidad. «No está la fortuna —concluyó— donde se nace; donde se vive está la fortuna», pragmatismo sin igual que permitió a este fidalgo cobrar una pensión de Felipe IV hasta morir en Madrid en 1660, y ello a pesar de que en fecha desconocida el gobierno —ordenó aunque sin llevarla a cabo— su expulsión a Portugal tras descubrirse su filiación bragancista ⁽²⁴⁾. Pero nadie como Francisco Manuel de Melo

(21) AGS, E, leg. 2668, consejo de estado, 7/IV/1644.

(22) Sebastián de Covarrubias, *Tesoro de la lengua* (Barcelona, 1943) [Madrid, 1611], p. 529.

(23) Vicente Carducho, *Diálogos de la Pintura* (Madrid, 1979) [Madrid, 1633], pp. 17-18. Hemos alterado el orden de la frase de acuerdo a una gramática más actual.

(24) La cita en Félix Machado de Silva Castro y Vasconcelos, *Vida de Manuel Machado de Azevedo*, C. Baladrón ed. (s.l., 1983) [Madrid, 1660], p. 29; sobre su expulsión fallida, AHN, Estado, libro 699, entrada *Marqués de Montebelo* (sin foliar). Decimos fallida porque Baladrón asegura que Montebelo murió en Madrid en 1660.

para cerciorarnos de cómo la dependencia entre las personas y su lugar de origen podía e incluso debía anularse: «Lo que llamamos patria, no sólo no nos ama, pero ni puede querernos. Luego engañadamente pretendemos ser correspondidos de aquella pasión. [De] donde un sabio se intituló ciudadano del mundo a fin de naturalizarse patriota del lugar de su descanso, no del de su nacimiento»⁽²⁵⁾.

La libertad para elegir patria sólo estaba limitada por el principio ya señalado de la lealtad al rey. Pero incluso esta lealtad podía alterarse siempre y cuando hubiera una justificación. Este problema remitía a otro de no menor envergadura: el de la libertad del hombre para elegir. Este tema, dentro de la cultura católica contrarreformista, se asentaba en la doctrina del libre albedrío, contrario a la predestinación de algunas iglesias reformadas. Como principio, representaba un peligro para quienes, como los portugueses del siglo XVII, no podían atribuir su decisión de permanecer en Madrid o volver a Lisboa más que a sí mismos. Por este motivo, tuvieron que crear unas nuevas reglas de elección capaces de justificar el baile de infidelidades que algunos protagonizaron, de modo que sus cambios de lealtad fueran vistos como producto de la ignorancia y no de la traición. Como señaló Melo desde su prisión lisboeta, el problema de la inconstancia en el hombre se explicaba por el mejor o peor «conocimiento» que pudiera tener sobre el objeto «que antes amaba, y ahora desprecia». Una vez hecha la luz, lo correcto era enmendar el error y empezar a amar lo que antes se aborrecía⁽²⁶⁾. Entre Madrid y Lisboa semejante doctrina resultó muy útil. Pues cuando Melo teorizaba sobre el derecho a corregir una elección errada, no sólo pretendía justificar el trasvase de su lealtad de Felipe IV a D. João de Bragança, sino también despejar el camino para facilitar, llegado el caso, un tercer cambio de actitud si finalmente las fuerzas austracistas recuperaban Portugal.

¿Hasta qué punto, pues, fueron los portugueses de Madrid un grupo de exiliados? Al margen del retrato ideal que cada uno hiciera de sí mismo, tal vez el camino más directo para llegar a saberlo sea el de atenerse a los hechos. Lo visto hasta aquí no parece confirmar ni que actuaran como un grupo ni, primordialmente, como exiliados. Únicamente entre los acérrimos de la causa Habsburgo se dio una característica inamovible: la negativa a sellar cualquier tipo de acuerdo con el régimen Bragança. Alineados con el sector más duro de los ministros castellanos, nadie como ellos puso tantos obstáculos cuando se planteó negociar con Portugal, ni siquiera una tregua, y cuando llegó la paz, en 1668, la repudiaron. Su objetivo, como no podía ser de otro modo, fue siempre la recuperación de Portugal, bien por medios pacíficos o violentos, pero esperar que aceptaran su independencia era pedir lo imposible. Incluso en el siglo XVIII, algunos de los des-

cendientes de estos exiliados defendieron la reunificación peninsular como principio de estado, lo que fue el caso de José de Carvajal y Lancaster (o Alencastro), el famoso ministro de Fernando VI y bisnieto del duque de Aveiro.

En conclusión, salvo en este campo el resto de las actitudes de los portugueses en Madrid a partir de 1640 parecen hablarnos de una continuidad en sus estrategias de comportamiento y no de una ruptura en comparación con antes de la rebelión. Servir al rey en Madrid o en otro lugar de la Monarquía y entroncar con linajes castellanos fueron hechos que, después de 1640, sin duda llamaron la atención más que antes, pero no suponían nada nuevo por parte de los portugueses desde su incorporación al imperio en 1580. La triple vía seguida por ellos para superar la crisis secesionista (regreso a Portugal, división familiar o castellanización), databa de mucho antes, pues siempre había sido la táctica habitual para alcanzar el eterno objetivo de crecer a la sombra de la corona, al margen de la dinastía que la encarnase.

A decir verdad, entre estos portugueses no hubo más objetivo común que el de figurar en la lista de «socorros», pues lo que contaba era asegurarse una renta que, ante la cada vez más improbable recuperación de Portugal, podía acabar siendo vitalicia e incluso hereditaria. Estos documentos, por contundentes que parezcan a la hora de demostrar la existencia de un grupo de «exiliados portugueses», son sólo un espejismo que puede confundir al historiador, dado que bajo su aparente uniformidad se ocultan las insalvables diferencias que mantuvieron sus protagonistas. Muchos de estos beneficiarios estaban ya en Madrid antes de 1640, y está por ver que fuera el golpe bragancista lo que realmente les impidió volver a Portugal. A la postre, regresaron casi todos, y sólo permanecieron en Castilla los que supieron convertir la rebelión en un magnífico negocio. El espléndido palacio que el marqués de Castel Rodrigo compró en la orilla del Manzanares en 1647, bien podría simbolizar el final feliz de muchas de estas biografías⁽²⁷⁾.

Por otra parte, ¿qué esperó obtener la corona de estos supuestos «desterrados»? Básicamente, reconstruir su autoridad en Portugal después de recuperarlo mediante la alianza con los elementos privilegiados que le habían sido fieles. El rey aprovechó la explosión de ambiciones desatada entre la nobleza lusa en 1640 para recuperar terreno en un Portugal donde su autoridad se había derrumbado en los años 1630. Pero no lo logró, a causa del fracaso militar de aquella guerra. Consciente Felipe IV de que en su corte batallaba con otra clase de ejército, no tuvo más opción que limitarse a cumplir con su papel de protector de vasallos, por exiguo que fueran los resultados. Su debilidad, como la de su rival D. João IV, contrastó con la libertad de los portugueses para elegir entre Madrid o Lisboa según les conviniera. En este sentido, la supuesta lealtad de los lusos hacia uno u

(25) Melo, *El Fenix de África*, p. 49.

(26) Melo, *El Fenix de África*, pp. 70-71.

(27) A. Gómez Iglesias, «La montaña del Príncipe Pío y sus alrededores (1565-1907)», Villa de Madrid, 25, VI (1969), pp. 11-29.

otro rey ocultaba una traición potencial que amenazaba con manifestarse en cualquier momento en favor de una u otra corte, al tiempo que confirmó la vigencia del mecanismo *servicio a cambio de merced* en que se basaba el pacto entre la corona y la aristocracia.

Esta realidad, pues, se oponía al discurso victimista que elaboraron los portugueses. Pero, con la perspectiva del tiempo, lo menos que puede decirse en su favor es que durante los casi treinta años de incertidumbre que supuso la guerra de Portugal, estos personajes se enfrentaron a la dura prueba de tener que retratarse moralmente ante sí mismos y ante los demás. En aras de una explicación más equilibrada, resulta legítimo plantearse qué habrían hecho en su lugar los nobles castellanos, arrogantes como sólo ellos supieron ser, si hubieran tenido que afrontar una crisis parecida en la corte de un rey ajeno a su nación. Sería ingenuo dejarse llevar por los testimonios de indignación de los castellanos ante los *desaprensivos* lusos, salvo, tal vez, para tomarlos como expresión de unas actitudes tan poco sinceras como las que mostraron los portugueses.

En las monarquías del Antiguo Régimen ningún vasallo podía tirar la primera piedra de la fidelidad desinteresada, desde el momento en que ésta funcionaba como una mercancía con la que se traficaba en busca de privilegios. Los portugueses de Felipe IV fueron leales, pero lo justo, y sinceros, pero también lo justo: ni más ni menos que los demás súbditos de la Monarquía. Ellos sabían que la Historia no está para hilvanar lecciones de moral, sino para aprender que la tristeza, la melancolía y las tribulaciones del exilio, bien administradas, podían rendir enormes dividendos. La protesta de los castellanos no se debió a motivos de justicia, sino más bien a lo poco habituados que estaban a compartir las prebendas. Quienes se manifestaron en contra de mantener a los portugueses con rentas castellanas, eran los mismos que en Flandes o Italia disfrutaban de cargos que reclamaban para sí los naturales de estos dominios. A su vez, hablar de castellanos en general resulta inoperante si antes no distinguimos al menos entre pecheros, oligarquías urbanas, aristócratas y eclesiásticos. De estos cuatro sectores, los tres últimos fueron los más activos en oponerse a las pensiones a fin de no sobrecargar a los contribuyentes (de los que tanto decían dolerse), pero, curiosamente, fueron ellos también los que menos hicieron para aliviarles cuando la oportunidad estuvo en sus manos: ni aceptaron pagar un impuesto único y proporcional en sustitución de todos los existentes, como la corona pidió varias veces durante estos años, ni pusieron excesivos reparos a la hora de elevar los servicios de cortes, de los que un porcentaje cada vez mayor era repartido entre los gobiernos municipales.

El declive de Castilla no fue causado por un sólo agente, sino que fue responsabilidad de todos aquellos grupos e instituciones que tuvieron alguna participación en su gobierno, con la corona al frente. Visto así, lo único que hicieron los portugueses de Felipe IV fue aprovecharse con inteligencia de esta situación,

infiltrándose en un sistema lleno de contradicciones donde casi nadie decía la verdad. A fin de cuentas, la «disimulación honesta» constituía una virtud sancionada por la época que todo buen cortesano debía ejercitar. Y eso fue, precisamente, lo que encendió la ira de los privilegiados castellanos: el que otros vasallos del imperio osaran aleccionarles en Madrid acerca de un arte en el que ellos habían demostrado ser consumados maestros.